

Política de Estados Unidos con respecto a la región andina
(Se concentra en democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas)

Lea también:

Consecuencias ambientales del narcotráfico y Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia

Fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas son las metas predominantes de paquete de ayuda que la administración Bush ha propuesto para los países andinos, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Conocida como la Iniciativa Regional Andina (ARI) la propuesta se les presentó a los reporteros el 16 de mayo en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que "todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado", dijo el Departamento de Estado en una hoja informativa emitida el mismo día.

Argumentaron algunos funcionarios que a menos que los gobiernos puedan asegurarle una mayor prosperidad a la región, en la que una vasta mayoría de ciudadanos sigue empobrecida, el potencial de inestabilidad política seguirá desalentando la inversión. La iniciativa, agregaron, promoverá crecimiento de largo plazo al apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas. Además, pone de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico, y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina.

El Departamento de Estado mencionó también la "necesidad apremiante de ayuda técnica y ayuda al desarrollo continuas, sobre la base de los programas existentes, para permitirles a estos países equilibrar mejor sus necesidades legítimas de desarrollo económico con el imperativo de proteger sus recursos naturales y preservar su diversidad ecológica única en su género". Según la hoja informativa del departamento sobre la política de Estados Unidos en relación con la región andina, la propuesta de Bush plantea una estrategia "que permita el crecimiento económico sostenible sin causar daño irreversible al medio ambiente".

La ayuda antidroga y a la ejecución de la ley es otro aspecto decisivo de la iniciativa, dijo el Departamento de Estado, particularmente si se tiene en cuenta que "los países andinos producen virtualmente toda la cocaína del mundo, y en años recientes se han convertido en el proveedor de heroína más importante de la costa oriental de Estados Unidos". La iniciativa apoyaría programas que estimularían el cultivo de cosechas legítimas como alternativa a la coca y la adormidera, y apoyaría también esfuerzos intensificados para erradicar los cultivos ilícitos y propiciaría un aumento de la cooperación en la interceptación de narcóticos y el enjuiciamiento de los traficantes de drogas. Estas medidas, que complementan las iniciativas de Estados Unidos para refrenar la demanda interna de

drogas ilegales, reflejan el interés del presidente de impedir que las operaciones colombianas del tráfico de drogas se "derramen" en las zonas fronterizas de los países vecinos.

La ayuda antidroga estadounidense en los Andes debe dirigirse "cuidadosamente hacia diferentes objetivos en cada país, a fin de satisfacer las necesidades individuales", dijo el Departamento de Estado, y agregó que "en la región, serán esenciales las consultas".

A continuación una traducción extraoficial del texto de la hoja informativa del Departamento de Estado que bosqueja las prioridades de la política del presidente en relación con la región andina:

(empieza el texto)

POLITICA DE ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A LA REGION ANDINA

La región andina representa un reto y una importante oportunidad para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. Importantes intereses nacionales de Estados Unidos están en juego en la región. La democracia está bajo presión en todos los países de los Andes, donde crecen dudas sobre la capacidad de los gobiernos democráticos para ofrecer los servicios básicos y mayor prosperidad. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconsistente. Los Andes continúan produciendo virtualmente toda la cocaína del mundo y una creciente cantidad de heroína, lo que representa una amenaza directa a nuestra salud pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas persistentes se relacionan entre sí. Las economías deficientes producen malestar político que amenaza a la democracia y proveen mano de obra para la producción y tráfico de narcóticos y los grupos ilícitos armados. Las instituciones democráticas débiles, la corrupción y la inestabilidad política desalientan las inversiones, contribuyen al lento crecimiento económico y proveen terreno fértil para el surgimiento de los traficantes de drogas ilícitas y otros grupos al margen de la ley. El comercio de drogas ilícitas también tiene el efecto de distorsionar la economía y desalentar las inversiones legítimas. Ninguno de los problemas de la región puede ser resuelto por separado. Más bien, todos ellos deben ser atendidos de manera abarcadora, junto con iniciativas apropiadas de diplomacia pública para adelantar nuestras metas en la región. Por esa razón el Departamento de Estado propone la asignación de casi 880 millones de dólares en fondos del Año Fiscal 2002 para la Iniciativa Regional Andina de la administración.

Metas primordiales del gobierno de Estados Unidos en los Andes

1. Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas 2. Fomentar el desarrollo económico sostenible y la liberalización del comercio 3. Reducir significativamente en la fuente la oferta de drogas ilícitas a Estados Unidos, reduciendo al mismo tiempo la demanda en Estados Unidos.

1. Democracia

La democracia en la región está bajo presión de una amplia variedad de fuentes. Las instituciones débiles, las rencillas políticas y la corrupción en toda la región reducen el apoyo popular a la democracia cuando la mayoría de las economías se desempeñan mal. El respeto a los derechos humanos ha mejorado, pero todavía no es uniforme en toda la región. El vínculo de una insurgencia violenta en Colombia atizada por los cientos de millones de narcodólares desestabiliza esa democracia de larga data. También preocupa que el comercio de las drogas ilícitas se derrame a los países vecinos.

Establecimiento de instituciones democráticas

La democracia está bajo ataque y en los Andes y se erosiona la confianza en las instituciones democráticas esenciales. Hemos observado un aumento de tendencias en el cuerpo político que buscan, o aceptarían, soluciones no democráticas.

En Perú el gobierno que será elegido en junio enfrentará el importante reto de reconstruir las instituciones democráticas que fueron deliberadamente debilitadas durante la administración Fujimori. El gobierno resultante posiblemente se forme con miembros con poca o ninguna experiencia en gobierno, dado el mandato de diez años de Fujimori y sus políticas de concentrar el poder en la presidencia. El continuo escándalo de corrupción de la era de Fujimori ha afectado la confianza pública en el liderazgo político del país. Trabajaremos estrechamente con la próxima administración, que probablemente carezca de experiencia luego de la gestión de Fujimori, para fortalecer las instituciones democráticas y promover el buen gobierno.

La democracia de Ecuador está bajo la presión de movimientos populistas e indígenas cada vez más radicales, atizados por una crisis económica generalizada. El levantamiento de enero de 2000 que provocó la salida del presidente Mahuad por medios extraconstitucionales podría repetirse en el futuro cercano si siguen erosionándose los esfuerzos para aplicar reformas estructurales. Esta situación ha tenido como resultado cuatro presidentes en los últimos cinco años. La ayuda al gobierno de Noboa con apoyo al fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción generalizada, y la reactivación de los esfuerzos de reforma son esenciales para promover la estabilidad.

Bolivia está también en medio de un período de turbulencia ya que dos veces en el año pasado, grupos radicales han iniciado protestas violentas que dañaron gravemente a la economía y desafiaron al gobierno de Banzer. Esos grupos (incluyendo a coccaleros, campesinos indígenas, profesores y consumidores urbanos) tienen metas diversas y no siguen un liderazgo monolítico, aunque en el pasado han demostrado capacidad de trabajar en conjunto por oportunismo. El gobierno de Banzer ha evitado de una manera enérgica y digna de elogio, el enfrentamiento violento e hizo concesiones mientras trata de llegar hasta aquéllos que en la oposición están dispuestos a entablar un diálogo y moderar sus puntos de vista. La perspectiva de otras protestas todavía persiste. El gobierno democrático de Bolivia necesita el apoyo norteamericano para abordar la eficiencia gubernamental y combatir la corrupción. Existe también la imperiosa necesidad de asegurarse de que se mantenga y adelante el historial impresionante del país en cuanto a los esfuerzos contra las drogas ilícitas.

En Venezuela, nuestra política es seguir trabajando con el gobierno en asuntos de interés mutuo, incluyendo algunos aspectos de cooperación contra las drogas ilícitas, reforma judicial, comercio y medio ambiente, y canalizar la ayuda a las organizaciones privadas de voluntarios y otros grupos que fortalecen la democracia en Venezuela. Los programas de diplomacia pública dedicados a promover los beneficios de las instituciones independientes y de la mutua limitación y equilibrio de poderes serán un elemento clave de este esfuerzo.

Las ramas judiciales de la región son débiles e incapaces. Padecen de ineficacia, equipos y entrenamiento deficientes, bajos salarios, corrupción generalizada y en el caso de Colombia, intimidación. Como consecuencia, los casos legales, tanto criminales como civiles, languidecen durante años en el sistema, y frecuentemente resultan en decisiones cuestionables. Este fenómeno es el meollo del grave problema de la impunidad en la mayor parte de los países. La gente común no tiene confianza en el sistema judicial, lo que las empuja a buscar medios extrajudiciales para solucionar sus disputas o proteger sus intereses. Los inversionistas de Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros han experimentado falta de protección segura de la ley, lo cual obviamente desalienta la inversión.

Las legislaturas de toda la región están divididas en peor grado por rencillas políticas y corrupción. En Ecuador, una enorme abundancia de pequeños partidos enemistados entre sí dificulta mucho la promulgación de leyes importantes. En la región ha se visto el fracaso de partidos políticos establecidos, lo que ha dado como resultado la elección a los cargos de candidatos sin experiencia y la radicalización de los candidatos populistas. El Congreso de Colombia está influenciado por los intereses de las drogas ilícitas.

Deberíamos estar preparados para dedicar importantes recursos para fortalecer las instituciones en los Andes. Los actuales programas de reforma judicial deberían reforzarse para cambiar los procedimientos anticuados e ineficaces, actualizar la legislación, promover un sistema judicial más independiente, dar entrenamiento a los fiscales, jueces y defensores

públicos, modernizar los equipos e instalaciones judiciales, mejorar las condiciones y la seguridad en las prisiones. Debe hacerse hincapié en iniciativas contra la corrupción para restaurar la confianza de la gente en sus instituciones. Las organizaciones privadas de voluntarios, incluyendo los sindicatos, deberían ser fortalecidas y alentadas a tener una participación activa en la vida política. Deberían intensificarse los esfuerzos de diplomacia pública para respaldar estas políticas. Debería hacerse hincapié especial en las organizaciones privadas de voluntarios que trabajan con las grandes poblaciones indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú, dado que esos grupos cada vez más se consideran mal atendidos y distanciados de sus gobiernos.

Derechos humanos

La situación de los derechos humanos en Colombia es mala, como resultado de la prolongada violencia interna que afecta a ese país. La gran mayoría de las peores violaciones de los derechos humanos las cometen miembros de grupos ilegales armados y ocurren en áreas del país donde el gobierno no tiene presencia significativa. Los paramilitares de extrema derecha son responsables por la mayor parte de las matanzas extrajudiciales, pero las FARC y el ELN también cometen numerosas violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales humanitarias, tales como el reclutamiento obligatorio de menores, secuestro y uso indiscriminado de armas de fabricación casera. Defensores de los derechos humanos, miembros del Congreso, periodistas, jueces, investigadores, fiscales, dirigentes sindicales y otros ciudadanos privados son todos víctimas de asesinato, secuestro y amenazas.

Aunque creemos que el presidente Pastrana y el liderazgo de las fuerzas armadas de Colombia trabajan para terminar la desagradable colaboración de estas últimas con los paramilitares, algunos miembros militares y de la policía colombiana siguen manteniendo lazos con los paramilitares y en algunas regiones los militares colombianos parecen cerrar los ojos ante las actividades paramilitares. El gobierno de Pastrana, y el alto mando del ejército y la policía han expresado su determinación de romper todos los lazos con los paramilitares y procesarlos con el mismo vigor con que lo hacen con las guerrillas y, en realidad se ha hecho algún progreso. Estados Unidos se propone hacer que cumplan esa promesa y presionar en favor de mayores avances. Necesitamos urgir al gobierno colombiano para que enjuicie plenamente a los violadores de los derechos humanos sea cual fuere su credo político. Sobre todo, el mandato de la ley debe ser ampliarse a muchas áreas geográficas donde ocurren desproporcionadas violaciones de los derechos humanos.

El entrenamiento de las fuerzas colombianas de seguridad en cuestiones de derechos humanos requiere atención permanente, y un apoyo considerable para reforzar las oficinas de derechos humanos en la Procuraduría y la Fiscalía. Necesitamos lograr también un compromiso mayor de parte del gobierno de Colombia para prevenir los ataques contra la población civil y los activistas de derechos humanos, y dar un mejor apoyo a la tarea de las organizaciones de derechos humanos responsables.

El resto de la región no puede ser ignorada. A pesar de que en ninguno de los países restantes hay una situación de derechos humanos tan problemática como la de Colombia, nuestros informes sobre derechos humanos han documentado problemas en todos ellos. Necesitamos seguir trabajando con los gobiernos y las organizaciones voluntarias privadas en cada país para resolver las cuestiones problemáticas. En Perú esto significará ayudar a reconstruir las instituciones debilitadas por el persistente socavamiento durante los años de Fujimori, tarea admirablemente iniciada por el gobierno de Paniagua.

Insurgencia colombiana y proceso de paz

La insurgencia en Colombia ya tiene 40 años de antigüedad y tiene recursos más grandes que nunca debido al influjo en los cofres de la guerrilla y de los paramilitares del dinero procedente del tráfico de drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión. El proceso de paz se ha estancado porque la disposición de las FARC para negociar de buena fe cada vez está sujeta a más interrogantes. Un posible entendimiento con la organización más pequeña ELN depende de que la población local acepte la creación de una "zona de encuentro", desmilitarizada, que permita negociaciones en un ambiente que las guerrillas consideren seguro.

Todos los vecinos de Colombia están afectados en un grado u otro por la violencia en ese país. Las FARC y el ELN cruzan desde hace años las fronteras internacionales para descansar, recreación y reabastecimiento. También se han dedicado periódicamente al secuestro, extorsión, y tráfico de drogas ilegales y armas hacia países vecinos. La organización AUC, cada vez más poderosa, ha comenzado a operar cruzando fronteras internacionales, lo que aumenta la posibilidad de que el conflicto armado se extienda a los países vecinos.

El conflicto ha generado hasta ahora relativamente pocos refugiados hacia países vecinos, aunque claramente existe el potencial de más de ellos si el conflicto se intensifica. Ha generado una cantidad importante de personas internamente desplazadas (PID) y las instituciones del gobierno colombiano tienen dificultades para atenderlas.

El apoyo al proceso de paz colombiano sigue siendo un elemento vital de la política de Estados Unidos. A pesar del lento progreso alcanzado hasta hoy, el proceso de paz representa la mejor oportunidad de Colombia para salir del ciclo de cuarenta años de violencia. Una solución militar no es una opción viable, porque las fuerzas armadas de Colombia no son suficientemente fuertes para enfrentar a los grupos de fuerzas irregulares que tienen crecientes ingresos procedentes del tráfico de drogas ilícitas. Los grupos insurgentes ni se acercan a la capacidad de derrocar al gobierno. Sin embargo, algún tipo de arreglo negociado sigue siendo la mejor solución posible, aunque requiera años.

conseguirlo, y no se logre mientras Colombia no reduzca el financiamiento de la insurgencia por parte del tráfico de drogas ilícitas y mejore la capacidad de sus fuerzas armadas y de la policía para que se conviertan en una amenaza cierta para los grupos ilegales armados y ofrezcan una adecuada protección a la población civil colombiana.

De manera similar tenemos que trabajar con los países vecinos y darles el apoyo a sus esfuerzos para contener la violencia en Colombia. Esos esfuerzos deben enfocarse en fortalecer su capacidad de hacer frente al desorden que impera en las zonas fronterizas, preparándolos para un posible flujo de refugiados y ayudándolos con programas de desarrollo alternativo. El gobierno colombiano también necesita ayuda en sus esfuerzos para atender a la gran cantidad de personas internamente desplazadas en Colombia, para reasentarlos y reintegrarlos a la economía. Los esfuerzos de diplomacia pública para explicar y crear apoyo a nuestras políticas y programas será muy importante. Con apoyo del Congreso el financiamiento de esos esfuerzos debe ser puesto a disposición de la Iniciativa Regional Andina.

2. Desarrollo económico y comercio

Todas las economías de la región han tenido dificultades en años recientes, y siguen siendo vulnerables a los reveses. Colombia, con elevado desempleo y falta de confianza de los inversionistas, principalmente por la inestabilidad política y la violencia, posiblemente sea el más vulnerable. A medida que se realizan las actividades contra las drogas ilícitas, dichas medidas deben ir acompañadas de programas de desarrollo alternativo diseñados para atraer a la economía legal a los ex cultivadores de la hoja de coca y la adormidera para opio. Ecuador atravesó una intensa crisis económica en 1999, y todavía es vulnerable. Los crecientes precios del petróleo han ayudado a la economía de Ecuador y contribuido a una dolarización exitosa que ha permitido restaurar la confianza en la economía. No obstante, importantes reformas estructurales, particularmente en el sector de la banca, están pendientes y son necesarias para una recuperación sostenible. Luego de la fuerte recesión de 1999, Venezuela se ha beneficiado de los altos precios del petróleo, pero los inesperados ingresos petroleros han permitido que el gobierno siga ampliando sus programas sociales y postergue las necesarias reformas estructurales. Si los precios petroleros caen y permanecen bajos por un largo período, la economía de Venezuela sufrirá y el gobierno de Chávez posiblemente enfrente una grave crisis política y económica. Bolivia y Perú tienen economías de bajo desempeño a pesar de sus políticas macroeconómicas generalmente adecuadas, pero enfrentan la incertidumbre debido a las próximas elecciones venideras y las futuras políticas macro económicas.

Desarrollo económico sostenible

Económicamente, la región andina es bastante diversa, pero los países comparten muchas características. Cada país andino tiene una profunda división entre una élite pequeña y

próspera y una clase empobrecida, con frecuencia de origen indígena. Algunos carecen de la combinación de políticas necesarias para fomentar el crecimiento. Otros tienen políticas correctas pero carecen del apoyo popular necesario para mantenerlas a largo plazo. El desarrollo está ligado estrechamente a la estabilidad política de la región.

Lo que quizás sea de importancia mayor para los intereses de Estados Unidos es el desarrollo alternativo, que ofrece opciones legítimas al cultivo de la coca y la adormidera. Desde hace varios años hemos aplicado importantes programas de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú, y han tenido bastante éxito, al combinarse con programas de erradicación agresiva e interceptación para lograr reducciones importantes en la cosecha de coca en esos países. Colombia trata de repetir ese éxito con el Plan Colombia; al combinar un nuevo programa de desarrollo alternativo con la erradicación aérea y las actividades de interceptación al sur de Colombia (actualmente la concentración de cultivos de coca más grande del mundo), Ecuador necesita ayuda adicional para el desarrollo alternativo en la región de la frontera norte para evitar la propagación de los cultivos a esa área.

La ayuda tradicional de desarrollo (AD) y los fondos de apoyo económico (ESF), que no están directamente relacionados con los programas contra las drogas ilícitas, también son importantes para ayudar a dar impulso a las economías debilitadas y reducir las disparidades de ingresos entre clases, grupos y regiones en los Andes que contribuyen a los disturbios políticos. Bolivia, en particular, es uno de los países más pobres de la región y se beneficia de la iniciativa de la deuda de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (PPFE), cuyo objeto es lograr que los ahorros del alivio de la deuda se dediquen a reducir la pobreza. Ecuador ha llenado también los requisitos de alivio de su deuda en el Club de París. Ecuador, Perú y Colombia también tienen urgentes necesidades de ayuda de desarrollo y respaldo económico. Venezuela, uno de los principales países exportadores de petróleo, tiene bases menos dramáticas para la ayuda económica, aunque algunos programas específicos podrían ser útiles, si el gobierno de Venezuela se comprometiera a ellos.

Necesitamos dar atención especial a la educación en los planes de desarrollo para esas naciones, en reconocimiento de la función decisiva de la educación en el desarrollo económico. La ayuda educativa a la región (becas, donaciones, etc.) debería aumentarse de manera significativa, en especial para los sectores indígenas de la población. Esperaríamos el establecimiento en la región andina de uno de los "Centro Educativos para la Excelencia" anunciados por el presidente el 21 de abril. Los esfuerzos de diplomacia pública financiados por medio de la Iniciativa Regional Andina apoyarán estas metas.

Medio ambiente

La región incluye algunos de los ecosistemas más únicos en su género del mundo, entre ellos los Andes y el Amazonas, al igual que tesoros ecológicos como las Islas Galápagos.

Muchas de las maravillas naturales de la región se ven amenazadas por el desarrollo invasor y son vulnerables a otros embates. Hay una necesidad apremiante de ayuda técnica y ayuda al desarrollo continuas, sobre la base de los programas existentes, para permitirles a estos países equilibrar mejor sus necesidades legítimas de desarrollo económico con el imperativo de proteger sus recursos naturales y preservar su diversidad ecológica única en su género. Es necesario desarrollar, aplicar y poner en vigor modelos que permitan el crecimiento económico sostenible sin causar daño irreversible al medio ambiente. Necesitamos también desarrollar programas para ayudar a reparar el daño ambiental provocado por la producción de drogas ilícitas.

Renovación de la ATPA

Quizás la mayor contribución individual de corto plazo al crecimiento económico y la prosperidad de los Andes sería la renovación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA), y la expansión de sus beneficios. La legislación se aprobó originalmente para ofrecer alternativas económicas a la producción y tráfico de drogas en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y ha tenido éxito en conseguirlo sin causar un impacto económico adverso para Estados Unidos. La justificación original de la legislación persiste todavía, pero la ley expira a fines de año y debería ser renovada lo antes posible. La administración apoya colaborar con el Congreso para expandir los beneficios de la legislación.

ALCA

Para los países andinos, la incertidumbre hace aún más difícil competir por la inversión, y hace aún más importante que optimicen sus políticas para atraer esa inversión. Desafortunadamente, la liberalización comercial se ha desenvuelto de manera desigual en la región. La mayoría de los países mantienen todavía barreras al comercio y la inversión que retardan el crecimiento económico. El Area de Libre Comercio de las Américas podría ayudar a toda la región a obtener, mediante el comercio libre, los beneficios de la inversión incrementada y la generación de empleos. Continuaremos también colaborando con todos los países andinos en torno a cuestiones comerciales que nos interesan, tales como los derechos de propiedad intelectual (DPI).

Hay en la región varios países con los que hemos mantenido negociaciones periódicas sobre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), entre ellos Colombia, Perú y Venezuela. Colombia ha introducido cambios constitucionales en sus cláusulas de expropiación que allanan el camino hacia un TBI final. Perú ha expresado recientemente renovado interés en un TBI, y Venezuela sigue siendo una posibilidad, dados los recientes cambios ministeriales. Sin embargo, del lado de Estados Unidos hay varias cuestiones de política de inversión que demoraron la conclusión de los TBI ratificados por el Senado en el otoño pasado. Estos problemas no han sido resueltos aún.

3. Ayuda antidroga y a la ejecución de la ley

El apoyo de Estados Unidos a las acciones antidrogas en los Andes tiene el propósito de reducir la producción ilícita de coca un 20 por ciento para fines de 2002 (año base: 1999), y un 40 por ciento para fines de 2007. Esto incluye una reducción del 30 por ciento en la producción colombiana de coca y la eliminación de la producción ilegal de coca en Bolivia para fines de 2002. La Estrategia Nacional de Control de Drogas se concentra en la prevención, el tratamiento, la investigación, la aplicación de la ley, la protección de nuestras fronteras, la reducción de la oferta de drogas y la cooperación internacional. Mediante una gama equilibrada de acciones de reducción de la demanda y reducción de la oferta, nos esforzamos para reducir a la mitad la adicción a drogas y la disponibilidad de éstas, y las consecuencias de la adicción a drogas en por lo menos 25 por ciento para 2007. Con este fin, el financiamiento de la reducción de la demanda se ha duplicado con exceso desde el año fiscal 1999 y es más del doble de lo que Estados Unidos gasta en todos los programas estadounidenses internacionales y de interceptación combinados.

Los países andinos producen virtualmente toda la cocaína del mundo, y en años recientes se han convertido en el proveedor de heroína más importante de la costa oriental de Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos a la región para combatir la producción y tráfico de drogas ha sido significativa, y ha logrado algunos éxitos notables. En los últimos cinco años el cultivo de coca en Perú y Bolivia ha sido reducido cerca de un 70 por ciento. Estos avances, sin embargo, se han visto anulados, en su mayor parte, por la expansión espectacular del cultivo de la coca en Colombia, plagada de conflictos, donde los traficantes, para prosperar y expandirse, han sacado partido de la falta de presencia gubernamental en las áreas rurales. Las organizaciones guerrilleras y los paramilitares ilegales están involucrados en todos los aspectos del comercio de drogas en las zonas bajo su control. Establecen cuotas de producción, cobran impuestos a la producción; proveen semillas y suministros, se establecen a sí mismos como los únicos agentes de compra de coca (con severas penas para los que venden a competidores) y controlan una cantidad significativa de la producción, que venden a los carteles internacionales de la droga.

Debido al éxito de la reducción de la oferta en Perú y Bolivia, la producción mundial de cocaína disminuyó casi un 20 por ciento entre 1995 y 1999. Esa disminución continuó en 2000 en Perú y Bolivia, pero, debido al aumento del cultivo de coca en Colombia, la producción general en todo el mundo se mantuvo estadísticamente estable en 2000. El potencial de producción de la cocaína colombiana ha aumentado más de 150 por ciento desde 1995.

Los patrones de consumo de la cocaína también han cambiado significativamente. El número de consumidores estadounidenses de cocaína ha caído un 70 por ciento desde su máximo en los años 80, lo que refleja una declinación radical del consumo esporádico de cocaína en Estados Unidos. Por consiguiente, la mayor parte de la cocaína la consumen los

adictos empedernidos. El consumo total de cocaína en Estados Unidos se ha mantenido estable desde 1997 en alrededor de 300 toneladas métricas anuales. Sin embargo, el consumo de cocaína en Europa y los países andinos de origen de la droga ha aumentado drásticamente en el mismo período, y estos dos grupos, tomados en conjunto, consumen aproximadamente la misma cantidad que Estados Unidos. El precio de la cocaína en Estados Unidos se ha mantenido estable o ha caído ligeramente, lo que refleja la continua y pronta disponibilidad. La continua presión sobre la demanda en Estados Unidos, unida a un apoyo apropiado en los países de origen andinos, debería crear un incentivo negativo a la producción ilegal de coca. La variable no controlable del mercado es el consumo de cocaína fuera de Estados Unidos.

Plan Colombia

La fuerte concentración de la industria de la cocaína en el sur de Colombia en los últimos años, protegida por un ambiente al margen de la ley promovido por una fuerte presencia y participación de las FARC y los paramilitares en el comercio de drogas, plantea tanto un reto como una oportunidad a la política estadounidense y colombiana. La respuesta del gobierno colombiano, que cuenta con nuestro apoyo, fue el Plan Colombia, programa de 7.500 millones de dólares y cinco años de duración, al cual Estados Unidos ha prometido más de mil millones de dólares en ayuda. Este ambicioso programa tiene un potencial tremendo, pero le llevará tiempo alcanzar el éxito, aunque los esfuerzos de erradicación e interceptación ya van comenzando con rapidez. Mantener el impulso de este programa es esencial para nuestros objetivos en la región.

Esfuerzos regionales para complementar el Plan Colombia

A todos los vecinos de Colombia les preocupa la posibilidad de un "derrame", específicamente en el sentido de que la presión aplicada por el gobierno colombiano en el sur de Colombia resulte en el movimiento de refugiados, guerrilleros, paramilitares y/o traficantes de drogas hacia otros países a través de las fronteras porosas. Si bien le recalamos a la región nuestro punto de vista de que los efectos corrosivos de la producción y el tráfico de drogas se han venido "derramando" durante años a través de las fronteras de Colombia, no creemos que el Plan Colombia resulte en la huida de un número significativo de refugiados, ni en un aumento significativo de las operaciones transfronterizas de las FARC, el ELN o las AUC. Creemos, sin embargo, que resultará en un desplazamiento importante de la industria de la cocaína. Los traficantes tratarán, indudablemente, de reubicarse a medida que sus operaciones en el sur de Colombia queden dislocadas. Creemos que, primero, tratarán de reubicarse en otras zonas atractivas dentro de Colombia, luego tratarán de regresar a sus áreas de cultivo tradicionales en Perú y Bolivia. Pero si se contienen estas operaciones, pueden muy bien tratar de trasladar más cultivos, procesamiento y/o rutas de tráfico a otros países como Ecuador, Brasil o Venezuela.

Para impedir que los traficantes se reubiquen simplemente en otras partes, es necesario reforzar nuestros esfuerzos antidrogas en los países vecinos. Por esa razón, en la asignación para el Plan Colombia en el año fiscal 2001 se separaron 180 millones de dólares para otros países de la región. A medida que avanza el Plan Colombia, será necesario evaluar constantemente la reacción de los traficantes y su potencial de restablecer la industria de la cocaína fuera de Colombia. Según evolucione la amenaza de las drogas fuera de Colombia, podemos tener necesidad de acelerar esta ayuda, o considerar un tipo de ayuda diferente, de modo que a los traficantes se les impida establecer una nueva zona de producción de coca. Esta ayuda tiene que equilibrarse con la interceptación y la aplicación de la ley, la erradicación, el desarrollo alternativo y la reforma judicial, dirigidos cuidadosamente hacia diferentes objetivos en cada país, a fin de satisfacer las necesidades individuales. En la región serán esenciales las consultas. Se necesitarán programas de diplomacia pública para explicar y respaldar el programa con financiamiento ampliado provisto a través de la Iniciativa Regional Andina.

Reducción de la demanda

Al programa andino lo complementa un aumento significativo de fondos destinados a la reducción de la demanda interna en Estados Unidos. Dado que los adictos empedernidos consumen en Estados Unidos una proporción mucho mayor de la cocaína que los consumidores esporádicos, es necesario que los esfuerzos de reducción de la demanda incluyan un esfuerzo más intenso para cerrar la brecha del tratamiento público. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 1998 sobre la Adicción a Drogas, el estimado de la diferencia entre aquéllos que necesitan tratamiento y aquéllos que en realidad lo reciben (brecha del tratamiento) es de aproximadamente 2,9 millones de personas.

En la última década, el Presupuesto Nacional de Control de Drogas destinado a reducir la demanda ha aumentado más de 60 por ciento, hasta un nivel de 5.800 millones de dólares en el año fiscal 2001. Este aumento es en su mayor parte resultado de los esfuerzos para ofrecer capacidad adicional de tratamiento de drogas, alentar el uso de programas basados en la investigación y enviar mensajes de prevención dirigidos específicamente a la juventud. Para atender la necesidad de capacidad adicional de tratamiento efectivo de la adicción a drogas, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) apoya programas que hacen que los servicios de tratamiento estén más ampliamente disponibles y sean más responsivos a las necesidades de servicio identificadas localmente.

Por ejemplo, el programa de Expansión de la Capacidad de Tratamiento Singularizado (TTCE) se estableció para dar servicios de tratamiento en áreas donde surge o existe ya la necesidad de esos servicios. De acuerdo con la Ley de Comunidades Libres de Drogas de 1997, una iniciativa nacional concede subsidios federales directamente a coaliciones de comunidades de Estados Unidos. Se han aplicado también esfuerzos substanciales para estimular el uso de programas de prevención y tratamiento basados en la investigación. Un ejemplo es la Red de Pruebas Clínicas de Tratamiento, que trata de salvar la brecha entre la

investigación y la práctica. Además, el Programa Nacional de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas respalda programas de prevención innovadores al otorgar subsidios a las comunidades que pongan en práctica en las escuelas programas basados en la investigación. Otro programa importante para reducir la población estadounidense de adictos utiliza el tratamiento de consumidores encarcelados. Finalmente, la Campaña de los Medios de Comunicación contra las Drogas entre los Jóvenes, dirigida a objetivos específicos, de alto impacto, que hace hincapié en la publicidad en medios múltiples, es un esfuerzo multidimensional concebido para educar y facultar a los jóvenes para que rechacen las drogas ilícitas.

Si se considera la tasa creciente de adicción y consumo de drogas en los países de origen, necesitamos acoplar los esfuerzos de reducción de la oferta al apoyo a los programas de reducción de la demanda del país anfitrión. Los programas de Reducción de la Demanda Internacional tienen el fin de: crear apoyo público y político en los países de producción y tránsito para que cooperen con Estados Unidos en reducir la oferta; fortalecer la voluntad de la comunidad internacional en favor de políticas antidrogas abarcadoras; aumentar la comprensión de sus propios problemas de consumo de drogas en países y regiones claves; mejorar las encuestas epidemiológicas y las iniciativas de concientización pública; educar a la comunidad internacional en torno a las políticas y programas estadounidenses para combatir la adicción a drogas; y establecer alianzas multilaterales efectivas para combatir el consumo de drogas. En apoyo de estos objetivos, hemos ofrecido información a visitantes internacionales, hemos apoyado esfuerzos contra la legalización emprendidos por organizaciones no gubernamentales, hemos servido de mecanismo coordinador con las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, y hemos compartido conjuntos de datos con varios países para mejorar la vigilancia de los problemas de salud y sociales relacionados con las drogas.

Una de las críticas constantes que encaramos en América Latina mientras trabajamos en el terreno de la lucha antidroga, es que Estados Unidos no hace lo suficiente para refrenar la demanda interna. Si bien hemos tenido algún éxito en ir más allá de la tradicional y estéril disputa entre países de oferta y países de demanda, y hemos invertido un esfuerzo considerable para explicar todo lo que hacemos en nuestro país para atender nuestros problemas de drogas, esto sigue siendo un tema de discusión. Al presente, el consumo total de cocaína en América del Sur y Europa compite de cerca con el consumo en Estados Unidos, lo que vuelve borrosa la vieja línea de distinción entre naciones productoras y naciones consumidoras y demuestra que la reducción de la demanda no es un simple problema estadounidense. Al proseguir con decisión con nuestros propios esfuerzos de reducción de la demanda, promovemos el apoyo político de los gobiernos extranjeros en favor de la reducción de la oferta y eliminamos un problema politizador potencial.

Ayuda de seguridad

La capacidad de las fuerzas armadas andinas de llevar a cabo sus misiones esenciales de apoyar las instituciones democráticas, controlar las fronteras internacionales y respaldar los esfuerzos antidrogas ha declinado significativamente en la última década. En general, las fuerzas armadas andinas se ven limitadas en su capacidad de realizar las misiones que les son requeridas. También se ven todavía influidas, en cierto grado, por rivalidades regionales históricas, que no reflejan amenazas reales y actuales a la seguridad nacional. La mayoría soporta la carga de un equipo en deterioro u obsoleto que cada vez se vuelve más difícil y caro de mantener y operar. Se beneficiarían enormemente de una modesta inyección de ayuda de seguridad en forma de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) y Adiestramiento y Educación Militares en el Extranjero (IMET) y del contacto incrementado con militares estadounidenses en general. El impacto en términos de profesionalismo, respeto a los derechos humanos y preparación para emprender misiones sería apreciable.

Es necesario que sigamos trabajando con las fuerzas armadas de los países anfitriones, la Organización de los Estados Americanos y la Junta Interamericana de Defensa (JID) para recalcar la subordinación a la autoridad civil legítima, la adhesión a las normas constitucionales y el respeto a los derechos humanos. Es necesario que mejoremos la cooperación regional a través del proceso de las Ministeriales de Defensa de las Américas y otras estructuras de defensa regional hemisférica, y que vinculemos más estrechamente este proceso con el proceso general de la Cumbre de las Américas para reducir la división entre civiles y militares que es evidente en la mayoría de los países andinos. Es necesario también que invirtamos fuertemente en el mejoramiento de la calidad y competencia de los civiles que trabajan en los ministerios de defensa de las naciones anfitrionas. Actualmente, hay falta de conocimientos y experiencia en la comunidad civil en torno a la toma de decisiones y la administración de recursos de la defensa, la política de defensa y las relaciones entre civiles y militares. El adiestramiento apropiado puede cubrir esta necesidad.

Es necesario que colaboremos con las naciones anfitrionas para estimular la reevaluación de sus misiones de seguridad nacional, restarle hincapié a las tradicionales rivalidades entre las fuerzas de seguridad para adaptarse a los retos cambiantes en materia de seguridad, inclusive las amenazas transnacionales como las drogas y la migración ilegal, el socorro y la ayuda humanitaria en casos de desastres, el mantenimiento de la paz y la protección ambiental. Deberíamos, en calidad de medidas de creación de confianza para disminuir la importancia de antiguas rivalidades, alentar la resolución de antiguas disputas fronterizas, apoyar la transparencia de los presupuestos militares y estimular el intercambio de información e inteligencia en relación con amenazas transnacionales.

Deberíamos estar preparados para aumentar nuestros contactos entre militares mediante ejercicios, educación y adiestramiento profesionales, intercambio profesional y visitas entre homólogos y otros programas. Las naciones anfitrionas necesitarán ayuda para seguir adelante con la modernización racional y apropiada del equipo militar para reemplazar equipo obsoleto que actualmente es parte del inventario. El uso del programa de Ventas Militares en el Extranjero (FMS) ampliará nuestros vínculos con las fuerzas armadas de las

naciones anfitrionas, promoverá la capacidad de operar recíprocamente con las fuerzas estadounidenses y aliadas y mejorará la capacidad de acción regional combinada, especialmente en operaciones de mantenimiento de la paz y socorro en casos de desastres.

4. Contribución internacional y del país anfitrión

Las naciones de la región ya se han comprometido firmemente en todas las tres principales áreas de interés: democratización, desarrollo económico y esfuerzos contra las drogas. Todas dedican porcentajes significativos de su presupuesto anual a estas áreas y todas están dispuestas a colaborar con nosotros en el diseño e integración de programas exitosos, asegurando que nuestros esfuerzos se combinen bien con los de ellas. Es imposible obtener cifras exactas, dado que las naciones dividen sus presupuestos de muchas maneras diferentes que no coinciden netamente con las categorías de la ayuda estadounidense propuesta, pero, en total, comprometen miles de millones de dólares para el desarrollo económico, la democratización y los esfuerzos contra las drogas en toda la región. Por ejemplo, Ecuador ha establecido la Iniciativa de la Frontera Norte para promover mejores seguridad y desarrollo en la región fronteriza con Colombia. Brasil ha emprendido la Operación Cobra, esfuerzo de aplicación de la ley que se concentra en la región de la Cabeza del Perro, fronteriza con Colombia. Además, Brasil ha ofrecido compartir con Colombia y sus otros vecinos andinos información sobre rastreo de sospechosos derivada de su Sistema de Vigilancia del Amazonas (SIVAM). Bolivia ha venido atacando la producción de drogas mediante su Plan Dignidad y desarrolla una estrategia general de reducción de la pobreza. Colombia sigue cumpliendo sus compromisos de acuerdo con el Plan Colombia. Panamá ha dado pasos concretos para mejorar la seguridad y el desarrollo en la región del Darién. El nuevo gobierno peruano ha hecho de la reforma de las instituciones democráticas una prioridad nacional y mantiene un historial impresionante de desempeño antinarcótico. En Venezuela, las autoridades locales han cooperado con decisión en la interceptación de drogas, de lo que es ejemplo el decomiso récord, el año pasado, de muchas toneladas durante la Operación Orinoco. Nuestra Iniciativa Regional Andina y nuestra estrategia se basan en estas estrategias nacionales y se interrelacionan con ellas.

De modo similar, los terceros países que son donantes y las instituciones financieras internacionales son particularmente activos en los aspectos de desarrollo económico y democratización, al proveer ayuda en forma de subsidios y préstamos orientados a objetivos específicos a los siete países que son motivo de preocupación. Continuaremos colaborando con las naciones anfitrionas y los contribuyentes internacionales para asegurar que estos programas de ayuda y los programas de las naciones anfitrionas estén respaldados adecuadamente y bien integrados.

(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: <http://usinfo.state.gov/espanol/>)

PARTE DOS. CONSECUENCIAS AMBIENTALES

LOS ANDES EN PELIGRO: CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL NARCOTRÁFICO

Consecuencias de la industria de la cocaína

©Parga-Tiempo/Corbis Sygma.

El cultivo y la producción de narcóticos representan una seria amenaza para el ambiente en la región andina y el sudeste de Asia, centros mundiales de las industrias de la cocaína y la heroína. Aunque no se puede evaluar la totalidad del impacto ambiental del narcotráfico, es evidente hay severas deforestación de los bosques tropicales y contaminación de las cuencas. Las consecuencias locales en el suelo, el agua y la diversidad biológica son a menudo devastadoras y pueden retrasar varios años la introducción de cultivos alternativos. La atención del público no se ha concentrado en tales problemas, ya que la publicidad se ha dedicado a hacer resaltar los efectos supuestamente negativos de los programas de erradicación mediante herbicidas, aunque el herbicida utilizado, el glifosato, casi no presenta riesgos para los seres humanos, los animales o el ambiente.

Los cultivadores de drogas en la región andina y el sudeste de Asia prefieren ubicar sus cultivos en zonas selváticas alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados. La delgada capa vegetal y el difícil acceso a dichas zonas generalmente desalienta la producción de cosechas lícitas. Para preparar el terreno para los cultivos ilícitos, antes de sembrar la coca se arrasan y queman los bosques. Debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir a las autoridades, los campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren nuevos campos selva adentro. Esta práctica acelera la deforestación y destruye, entre otros, recursos madereros que de otra manera podrían estar disponibles para un uso más sostenible de la tierra selvática. Además, la práctica recurrente de sembrar en un suelo tan frágil puede llevar rápidamente al deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, especialmente a la erosión del suelo y a la pérdida de la capa superior y la sedimentación río abajo.

La deforestación causada por el cultivo de narcóticos en las cuencas montañosas aumenta la gravedad de inundaciones y sequías. También puede reducir las fuentes de agua en los valles donde hay zonas gravemente deforestadas, debido al escurrimiento de las aguas subterráneas y a la mayor sedimentación de los arroyos. Estudios ecológicos demuestran que muchos bosques tropicales no cultivados se caracterizan por suelos infértiles con partículas de arcilla y limo, de textura porosa de mediana a fina, los cuales se erosionan fácilmente si las raíces de las plantas no sostienen la tierra y absorben grandes cantidades de agua. Hasta los terrenos cultivados con coca son propensos a la erosión, porque estas plantas perennes no son tan efectivas como el bosque tropical para absorber agua y mantener la tierra en su sitio. Además, las copas de los árboles amortiguan el impacto de las gotas de lluvia que, de otra manera, podrían remover las partículas de tierra y aumentar las probabilidades de erosión.

DESTRUCCIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN ANDINA

La expansión del cultivo, la producción y el tráfico de coca en Perú, Bolivia y Colombia ha destruido por lo menos 2,4 millones de hectáreas de frágil bosque tropical en la región andina en los últimos 20 años. El deterioro ambiental causado por el cultivo ilícito de coca es acumulativo e incluye no sólo el impacto del cultivo actual sino también el de las áreas que quedan abandonadas a través del tiempo y la tierra que se despeja para sostener a la población dedicada al narcotráfico. El cultivo tradicional de coca, por ejemplo, tal como lo practican los grupos indígenas en Bolivia, probablemente causa menos daño ambiental porque sucede en áreas cultivadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el cultivo ilícito de coca se lleva a cabo en gran escala (a menudo por gentes provenientes de las ciudades) quienes tienden a ignorar las técnicas de siembra tradicional (tales como el uso de terrazas) y, en su búsqueda de ganancias, causan graves daños ambientales en zonas vírgenes con potencial agrícola, para satisfacer la demanda de los mercados externos. La siembra de cultivos ilícitos ha acelerado espectacularmente la fragmentación de los bosques en muchas áreas de la región andina. Actualmente, la fragmentación de los bosques como resultado del cultivo de coca en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, se documenta y cuantifica fácilmente mediante imágenes captadas por satélites.

EJEMPLOS HISTÓRICOS: PERÚ Y BOLIVIA

Perú y Bolivia ofrecen un precedente histórico muy claro del impacto ambiental causado por los cultivos ilícitos, aunque entre 1992 y 2000 ambos países hayan reducido espectacularmente la extensión de los cultivos de coca. Según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2001, preparado por el gobierno estadounidense, el cultivo de coca en Bolivia disminuyó durante ese período de 48.000 a 22.000 hectáreas, con lo que casi se llegó a eliminarlo totalmente. Las cifras correspondientes a Perú fueron aún más espectaculares, pues la cantidad de tierra utilizada para el cultivo de coca cayó de 129.000 a menos de 34.000 hectáreas.

El crecimiento de los cultivos de coca en ambos países durante los años setenta y ochenta suministró pruebas suficientes de cómo los cultivos ilícitos llevan a la destrucción de los recursos del bosque tropical. Según un ambientalista peruano, la hoja de coca fue la especie más cultivada en el Amazonas peruano durante los años ochenta y fue responsable de un porcentaje significativo de la deforestación durante las décadas del setenta y ochenta.

Según cálculos del Departamento de Estado, a principios de la década del setenta el cultivo de coca en Perú llegaba a sólo 16.000 hectáreas, y en gran parte se utilizó para satisfacer las necesidades de la población local. Un estudio realizado por un experto forestal peruano mencionó que entre 1970 y 1987 la destrucción de bosques tropicales producto del cultivo de coca en el valle del Alto Huallaga llegó a más de 200.000 hectáreas. Según un estudio realizado en 1987, a lo largo de la cuenca peruana del Río Amazonas las plantaciones de coca y las actividades de su procesamiento y tráfico causaron la destrucción de otras

700.000 hectáreas de bosque (el 10% de la destrucción del bosque tropical en Perú durante el siglo).

En Bolivia, el despeje por medio de la tala y quema para emprender nuevos cultivos de coca tuvo como resultado la destrucción de casi 40.000 hectáreas de bosque en la región del Chapare, desde mediados de la década del ochenta hasta el final de los años noventa. Algunos cultivadores de narcóticos, anticipándose a los programas gubernamentales de erradicación de cultivos, ampliaron y descentralizaron sus plantaciones, contribuyendo al aumento del número de áreas arrasadas para el cultivo de coca. Aun el uso tradicional de terrazas por los cultivadores en la región de Yungas, en el oeste boliviano, no fue suficiente para evitar la erosión. Como en el caso de las viejas áreas de cultivo en Perú, más y más tierra boliviana quedó vulnerable a la erosión a medida que los cultivadores abandonaron campos agotados y comenzaron en nuevos campos.

El despeje del bosque tropical para los cultivos ilícitos en la región andina contribuyó al cambio de los patrones de los recursos hídricos del Amazonas. Según un estudio realizado en 1980 por la Asociación Norteamericana para el Progreso de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science), entre 1960 y 1970 las inundaciones estacionales del Río Huallaga en Tingo María aumentaron significativamente debido a la gran afluencia que causó la deforestación de la cuenca. En noviembre de 1987, según informes de prensa en Lima, las fuertes lluvias en el valle del Alto Huallaga provocaron la peor inundación en la historia del Perú, y causaron grandes aludes que acabaron con la vida de un sinnúmero de residentes rurales.

COLOMBIA

La deforestación causada por los cultivadores de coca durante los años setenta y ochenta fue en Colombia menos severa que en Perú o Bolivia. Pero esta situación cambió durante los años noventa, cuando los narcotraficantes comenzaron a utilizar más el territorio colombiano para sus cultivos ilícitos. En Colombia, el cultivo de coca aumentó en 27.000 hectáreas, o sea el 175%, entre 1985 y 1989. Esta tendencia se disparó posteriormente durante gran parte de los años noventa, especialmente en los departamentos de Putumayo y Caquetá y en los llanos orientales. Según el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2001, el área total utilizada en Colombia para cultivar coca se cuadruplicó, de 38.000 hectáreas en 1992 a 136.000 en el 2000. En respuesta, el gobierno de Colombia emprendió a finales del año 2000 una gran campaña de rociado en el departamento de Caquetá y el sudoeste de Putumayo, siendo este último el sitio con mayor densidad de cultivos de coca en el mundo y la mayor expansión del cultivo de coca en Colombia. Aunque el gobierno colombiano rociaba desde hacía algún tiempo en otras partes del país, no lo había hecho en Putumayo anteriormente. Desde finales de diciembre de 2000 hasta principios de febrero de 2001, se erradicaron de manera efectiva cerca de 20.000 hectáreas de coca por medio del rociado aéreo en Caquetá y Putumayo.

Según estudios académicos, los cultivadores colombianos abandonan sus campos después de tres o cuatro años, a medida que la producción de sus cultivos disminuye, pero en Perú y Bolivia el promedio de vida del terreno para el cultivo de coca es de 15 a 20 años. Luego, los campos se abandonan y se arrasa más bosque tropical para reemplazar los cultivos de coca. El extenso despeje de tierra para la producción de otro cultivo ilícito en Colombia, la adormidera, aumentó los daños y las muertes causados por aludes originados por terremotos en el occidente de Colombia hacia finales de los años noventa.

Ante la creciente presión gubernamental sobre las actividades del narcotráfico en Perú y Bolivia, en los años 90 el cultivo de coca se trasladó cada vez más de estos dos países hacia el este y sudoeste de Colombia (especialmente hacia los departamentos de Caquetá y Putumayo), donde más de 101.250 hectáreas de bosque tropical han sido arrasadas y sembradas de coca. Además, se calcula que de 6.000 a 8.100 hectáreas de bosque tropical, principalmente en las regiones montañosas de los Andes colombianos, han sido despejadas para sembrar adormidera, la materia prima utilizada para la producción de la pasta de opio.

DESECHOS QUÍMICOS: EFECTO SECUNDARIO DEL NARCOTRÁFICO

El impacto ambiental del narcotráfico no puede medirse sólo en términos de las hectáreas o de los kilómetros cuadrados afectados. El proceso mismo de convertir las hojas de coca en cocaína genera un grave daño ambiental debido a la eliminación irresponsable de los desechos de productos químicos tóxicos utilizados en el procesamiento.

La producción de cocaína es un proceso en tres pasos: de la hoja de coca a la pasta de coca, de la pasta de coca a la base de coca y, finalmente, de la base de coca a la cocaína HCl. Durante cada uno de estos pasos, los narcotraficantes utilizan una gran cantidad de productos químicos que posteriormente se arrojan como desechos en la zona circundante.

En la primera fase, durante la cual se convierte la hoja de coca en pasta de coca, proceso que generalmente se realiza cerca del sitio del cultivo, las hojas se colocan en un recipiente o un hoyo forrado en plástico en el cual se vierte un ácido fuerte (como el ácido sulfúrico), agua y kerosén. Después de agitar la mezcla, los alcaloides de la cocaína y el kerosén se separan del agua y de las hojas de coca. El agua y las hojas se sacan y se agrega carbonato de sodio a la solución de kerosén y ácido para producir un precipitado. Esta solución se arroja luego al suelo y/o se la vierte en un arroyo o río cercano; el precipitado se filtra y seca para producir la pasta de coca.

La segunda fase, en la cual se convierte la pasta de coca en base de coca, puede llevarse a cabo en el sitio donde se refina la pasta de coca o en un laboratorio que puede o no estar ubicado cerca del sitio del cultivo. En un fórmula de uso común, la pasta de coca se disuelve en agua con ácido sulfúrico o clorhídrico. Posteriormente se mezcla permanganato de potasio con agua y se agrega a la solución de pasta y ácido. La solución resultante se

filtra y el precipitado se desecha. Se agrega agua de amoníaco a la solución filtrada para hacer que la base de la cocaína se precipite y, los residuos químicos se vierten en un arroyo o río cercano.

Durante la etapa final de la conversión de la base de coca en cocaína HCl, se utiliza acetona o éter para disolver la base de coca. Se agrega a la solución de cocaína ácido clorhídrico diluido en acetona o éter. El solvente de acetona o éter restante se desecha o recicla.

Un estudio realizado por la DEA en 1993 sobre la producción de cocaína en la región del Chapare en Bolivia, demostró que la producción de un kilogramo de base de coca requiere tres litros de ácido sulfúrico concentrado, 10 kilogramos de cal, 60 a 80 litros de kerosén, 200 gramos de permanganato de potasio y un litro de amoníaco concentrado.

El desecho de los productos químicos que se utilizan en el proceso del cultivo y la producción de narcóticos también tiene efectos devastadores en los ecosistemas tropicales. Para deshacerse de los residuos venenosos, generalmente los procesadores, de manera indiscriminada, los arrojan a la corriente de agua más cercana, donde el daño se incrementa significativamente. También desechan estos productos químicos en el suelo, que así pueden filtrarse a las aguas subterráneas. Las sustancias utilizadas de manera excesiva también pueden ser arrastradas por la lluvia hacia la cuenca local. Estos productos químicos hacen daño a la fauna y a la flora, directa o indirectamente, por medio de la cadena alimenticia. El contenido de oxígeno del agua también puede reducirse a un punto sofocante para la vida animal y la turbiedad del agua puede aumentar hasta bloquearles la luz solar a las plantas. Mas aún, los seres humanos que consuman productos animales o vegetales provenientes de esta cadena alimenticia contaminada corren el riesgo de absorber numerosos agentes cancerígenos.

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA REGIÓN ANDINA

Como es evidente, durante las tres etapas del proceso de refinación para producir la cocaína se utilizan grandes cantidades de productos químicos. Un informe científico de la Universidad Agraria de Lima (Perú), por ejemplo, corroboró denuncias de que en Sudamérica se utilizan anualmente hasta 600 millones de litros de precursores químicos para producir cocaína. Esto se traduce en más de dos toneladas métricas de residuos químicos por cada hectárea de coca procesada.

Según informes de prensa y encuestas científicas, los cultivadores de coca en Colombia, Perú y Bolivia también utilizan grandes cantidades de pesticidas tóxicos para ayudar a despejar nuevos terrenos y para controlar la maleza y otras plagas. Además, hay problemas ambientales causados por las hojas de coca que ya han sido procesadas; se las deposita en pilas, generalmente cerca de un arroyo si el laboratorio de refinación está ubicado allí. Las hojas están saturadas con productos químicos tóxicos y, a medida que se pudren, son el

origen principal de contaminación para cualquier fuente de agua cercana, ya que agregan una inmensa cantidad de materia orgánica al agua. Esto aumenta la demanda de oxígeno y puede afectar seriamente una corriente de agua en una larga extensión.

Nuevamente, la historia suministra pruebas convincentes del daño ecológico causado por el narcotráfico. Según un informe de la Universidad Agraria de Lima, sólo en 1986, los traficantes en el valle del Alto Huallaga en Perú arrojaron más de 100 millones de litros de residuos venenosos (gasolina, kerosén, ácido sulfúrico y tolueno) a la cuenca del río Huallaga durante el proceso de producción de pasta de coca. Los expertos ambientales confirmaron que muchos de los afluentes del río Huallaga (el cual desemboca en el río Amazonas) estaban casi totalmente desprovistos de muchas especies de flora y fauna y superaban las normas de contaminación establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, según un artículo publicado por la revista ambiental peruana Medio Ambiente, los residuos de los herbicidas como el paraquat o el 2,4-D y de los insecticidas utilizados por los cultivadores de coca, contaminaron áreas de bosque adyacentes y pueden haber afectado el suelo al ser aplicados en cantidades por encima de las recomendadas.

En Bolivia, millones de litros de residuos químicos tóxicos se derramaron indiscriminadamente en el suelo y en los arroyos cercanos a los laboratorios de pasta y base de coca. La magnitud del problema se hizo evidente cuando, en un período de sólo dos años, de 1987 a 1989, las autoridades destruyeron más de 11.000 laboratorios de pasta de coca en Bolivia, ubicados principalmente en el Chapare.

Después que varios laboratorios de procesamiento de cocaína se trasladaron hacia los sitios selváticos alejados en el este y sur de Colombia, el daño ecológico causado por la contaminación de los precursores químicos también se ha incrementado en ese país. Por ser actualmente el primer procesador mundial de cocaína refinada (hidrocluro de cocaína o cocaína HCl), el ecosistema colombiano sufre el desecho masivo, descontrolado e irresponsable de precursores químicos. Se necesitan grandes cantidades de éter etílico, acetona, y ácido clorhídrico para convertir la base de coca en cocaína HCl y estos precursores se arrojan finalmente en los arroyos cercanos que suministran el agua requerida durante las tres etapas del proceso de producción.

EL GLIFOSATO Y EL AMBIENTE

La erradicación aérea de los cultivos ilícitos en Colombia sólo se lleva a cabo con glifosato, uno de los herbicidas más ampliamente utilizados en todo el mundo. Actualmente el glifosato se utiliza en más de 100 países, incluido Estados Unidos, donde se aplican anualmente aproximadamente de 17 a 22 millones de kilogramos. Menos del 10% de la cantidad total del glifosato utilizado cada año en Colombia está relacionado con el programa de erradicación aérea; más del 90% lo utilizan los agricultores locales en la etapa previa a la siembra de arroz, algodón, maíz, sorgo, cebada y soya, así como para el control de malezas en cultivos de café, banana y otras frutas, y como agente de maduración de la

caña de azúcar. Hasta cultivadores de adormidera y coca lo utilizan para controlar la maleza.

El uso del glifosato ha sido tema de una extensa cantidad de literatura científica, con base en investigaciones independientes, que se ha sometido al escrutinio de la comunidad científica, la cual lo ha presentado como un producto de bajo riesgo para la salud humana. El glifosato es uno de los herbicidas menos dañinos disponibles en el mercado mundial, ya que sólo actúa sobre las plantas que están sobre el suelo en el momento del rociado, a través del contacto con sus hojas. Al entrar en contacto con el suelo el glifosato deja de actuar como un herbicida y se descompone rápidamente por la acción de microorganismos. Algunos productos del glifosato están entre los pocos herbicidas aprobados para aplicar directamente a malezas acuáticas o para el control de la vegetación cerca de estanques, arroyos y canales.

Estudios de toxicología han demostrado que el glifosato es menos nocivo que la sal, la aspirina, la cafeína, la nicotina y hasta la vitamina A. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha declarado que el glifosato no es cancerígeno y no presenta mucho riesgo de causar defectos genéticos en los seres humanos. El glifosato es levemente nocivo para las aves silvestres y prácticamente inofensivo para los peces. La cantidad mínima de la sustancia que los peces, las aves y los mamíferos retienen es rápidamente eliminada. El glifosato es tan benigno que se lo utiliza hasta para controlar la vegetación en las Islas Galápagos, uno de los ambientes más frágiles y protegidas del mundo.

CONSECUENCIAS MUNDIALES

Además del impacto, a menudo destructivo, del narcotráfico en el ambiente regional y local, también pueden surgir repercusiones ambientales en mayor escala. Aunque es poca la contribución de los cultivos ilícitos y el procesamiento de narcóticos a la deforestación y contaminación mundiales, el narcotráfico, a diferencia de las empresas legales, no puede controlarse por medio de la reglamentación ambiental oficial. Desde esta perspectiva, la extensa destrucción del bosque tropical en la región andina y el sudeste de Asia tiene importantes costos de oportunidad económica. Además, la pérdida de bosque debida a la expansión de los cultivos ilícitos contribuye a cambios atmosféricos potencialmente dañinos y a la pérdida de plantas valiosas y poco comunes, a partir de las cuales se podrían desarrollar productos farmacéuticos y cultivos comestibles permanentes. Los cultivos ilícitos han agregado otro incentivo económico poderoso y dañino al despeje de bosque tropical, con repercusión en la biodiversidad, la fertilidad del suelo y las fuentes de agua.

El despeje por medio de la tala y quema, que es la constante en los cultivos ilícitos, contribuye a generar cambios en el equilibrio de los gases en la atmósfera. La quema de los bosques tropicales emite grandes cantidades de metano, bióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, los llamados gases del efecto de invernadero. Aún no se ha establecido claramente el impacto de la acumulación de estos gases sobre el clima mundial.

La conservación de las especies de plantas tropicales es importante para garantizar la salud y la productividad de los recursos alimenticios futuros. El mundo depende esencialmente de 20 especies de plantas como fuente primaria de alimentación, y muchas de ellas provienen de genotipos de origen tropical. En el proceso de mejoramiento de estas plantas para obtener un rendimiento máximo, se ha reducido significativamente la resistencia genética a las plagas y enfermedades. Si alguna plaga o enfermedad afecta a estos híbridos modernos, un importante mecanismo de defensa es volver a reproducir el genotipo original de la planta. Por ejemplo, en 1970 un hongo de hoja afectó los cultivos de maíz en todo el este de Estados Unidos, eliminando el 15% de la cosecha y causando pérdidas por más de 2.000 millones de dólares. La introducción de plantas de maíz genéticamente resistente a las plagas, cuyo ancestro genético había tenido su hábitat natural en México, eliminó el peligro causado por ese hongo. Es imposible predecir con anticipación si variedades de plantas poco comunes que se encuentran actualmente en los ecosistemas amenazados por los cultivos ilícitos, podrían necesitarse con tales propósitos en el futuro.

La extensión y diversidad biológica de los bosques tropicales también son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Uno de cada seis productos farmacéuticos disponibles por prescripción médica tiene materias primas de origen tropical. Las enfermedades tratadas exitosamente con estos compuestos incluyen la enfermedad de Hodgkins, la hipertensión, la artritis reumatoide, la malaria y la leucemia. Las propiedades de los productos químicos que aún no han sido probados sólo pueden imaginarse; por ejemplo, las propiedades medicinales de los agentes anticancerígenos descubiertos en la Vinca mayor no se habrían podido descubrir sobre la base de los conocimientos químicos existentes.

Aunque la pérdida de bosque tropical como resultado de los cultivos ilícitos es sólo una pequeña parte del problema mucho mayor de la deforestación, cada pedazo de bosque perdido es potencialmente importante por la increíble diversidad de especies que hay allí. Aunque estos bosques sólo cubren el 6% de la superficie de la tierra, albergan a por lo menos el 50% de todas las especies vegetales, y estudios científicos sugieren que la lejanía de las regiones tropicales es la razón por la cual muchas otras especies no han sido descubiertas. Por ejemplo, en Colombia se han descubierto unas 1.100 especies de plantas vasculares en tan sólo 250 hectáreas de bosque, en comparación con unas 1.450 especies descubiertas en Gran Bretaña e Irlanda.

COLOMBIA: LA BIODIVERSIDAD EN PELIGRO

Según el gobierno de Colombia, la extraordinaria riqueza de su diversidad biológica está seriamente amenazada por los narcotraficantes, quienes cultivan coca y adormidera en regiones ecológicas delicadas del país.

Aunque sólo ocupa el 0,7% de la superficie terrestre, en Colombia existe el 10% de la diversidad biológica de la tierra, inmediatamente después de Brasil, cuya superficie es muchísimo mayor, y cuenta con una amplia variedad de ecosistemas que van desde las cadenas montañosas de los Andes hasta los bosques tropicales y las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

La riqueza del patrimonio natural de Colombia incluye bosques tropicales que se extienden por casi 680.000 kilómetros cuadrados, o sea más de la mitad del país, así como 55.000 especies de plantas, 1.721 de aves, 205 de lagartos y 430 de ranas y sapos.

Cuando los narcotraficantes se deshacen de los precursores químicos utilizados en el procesamiento de la heroína y la cocaína, causan un enorme daño ambiental a los bosques tropicales y los sistemas fluviales.

El gobierno colombiano calcula en más de un millón de toneladas la cantidad de sustancias químicas arrojadas por los narcotraficantes al ecosistema nacional desde mediados de los años ochenta. El gobierno colombiano también calcula que el área total deteriorada, directa o indirectamente, por el cultivo de adormidera en los bosques andinos y en la región montañosa, es de 78.500 hectáreas. Los cultivos de coca deterioran otras 425.600 hectáreas de bosque tropical en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco.

Las otras regiones de bosque tropical del país tienen una de las más altas tasas mundiales de pérdida de bióxido de carbono, un elemento fundamental para contrapesar la emisión de los gases del efecto de invernadero y controlar el cambio climático. Desde 1985, más de un millón de hectáreas de bosque tropical en Colombia han sido destruidas para sostener los cultivos ilícitos de coca y adormidera.

LOS COSTOS REALES DE LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO

La industria del narcotráfico ha opacado los costos económicos reales y las distorsiones que causa. Entre estos costos está la pérdida de oportunidades de un desarrollo económico rural más sostenible, debido a la devastación ambiental de las zonas tropicales; como mínimo, la cosecha más cuidadosa de los bosques tropicales podría suministrar madera tanto para uso local como para la exportación. Las especies tropicales poco comunes también ofrecen la posibilidad de grandes descubrimientos farmacéuticos. Sin embargo, la pérdida permanente de los suelos tropicales y de las cuencas fluviales implica un daño económico más prolongado. Hasta los cultivos ilícitos se vuelven imposibles cuando desaparece la capa vegetal y, con ella, los nutrientes del suelo y su capacidad de retener agua eficientemente. Entonces, se despeja más terreno por medio de la técnica de tala y quema, pero las posibilidades de un desarrollo económico alternativo en regiones como el valle del Alto Huallaga en Perú disminuyen con la deforestación.

Tan desalentadoras como pueden ser estas pérdidas (potenciales y de otro tipo), hay señales de que por lo menos unos pocos países se han interesado en el daño político causado al permitir que el narcotráfico continúe sin obstáculos. Por ejemplo, a partir de 1986, el ex primer ministro de Jamaica Edward Seaga destacó la naturaleza indiscriminada y dañina de los cultivos ilícitos en esa isla, para iniciar un exitoso programa de control de cultivos ilícitos. Al atacar en un discurso por la televisión nacional la deforestación causada por los cultivadores de marihuana, Seaga suscitó preocupación popular por el ambiente. Esta táctica fue útil para ayudar al gobierno de Jamaica a organizar un programa de erradicación que redujo el cultivo de marihuana en casi un 80%.

El deterioro ambiental causado por el narcotráfico generalmente se desconoce, aun en los países más afectados. La falta de información completa para documentar los devastadores efectos ecológicos del narcotráfico, así como la percepción extendida -- pero equivocada -- que hay en los países productores en el sentido de que el narcotráfico les suministra divisas esenciales y un medio de subsistencia en las áreas rurales, opacan en parte el problema.

Sin embargo, como lo demuestran sin ambigüedad las pruebas científicas, el cultivo y procesamiento de cultivos ilícitos ya ha causado un daño ambiental importante en la región andina, uno de los ecosistemas más valiosos de la tierra. Ese daño continúa actualmente y, mientras el narcotráfico prospere, la rica diversidad biológica regional, que representa un irremplazable patrimonio natural de toda la humanidad, continuará en peligro.

TERCERA PARTE

Funcionario E.U. defiende erradicación aérea drogas en Colombia

Washington -- Estados Unidos no puede encontrar ninguna prueba científica digna de crédito de que el programa de rociamiento aéreo para erradicar drogas en Colombia represente un peligro para la salud de los seres humanos, dice Rand Beers, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Al informar a los reporteros el 16 de agosto sobre el programa de rociamiento aéreo del gobierno colombiano, programa que recibe apoyo financiero de Estados Unidos, Beers refutó informaciones aparecidas en los periódicos que dicen que, como resultado de la campaña de rociamiento aéreo para detener la producción ilícita de coca, ocurre una "epidemia" en el sur de Colombia. Agregó que el gobierno de Estados Unidos "busca información digna de crédito que pueda relacionarse directamente con el rociamiento". Si se encuentra información acerca de daños, dijo, la administración Bush reexaminará el programa y determinará si corresponde hacer cambios. Artículo completo

Altos funcionarios E.U. urgen renovación pacto comercial andino

El pacto comercial que desde hace una década vincula a Estados Unidos con cuatro países andinos ha tenido éxito y debe ser prorrogado cuatro años y ampliado para que cubra más productos, dicen dos altos funcionarios de la administración Bush.

"La renovación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA) robusta es tal vez la contribución más importante que podemos hacer al crecimiento y la prosperidad económicos de los Andes", dijo Alan Larson, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y Agrícolas, en una declaración del 3 de agosto ante una subcomisión de la Comisión de Finanzas del Senado. Artículo completo

Cámara aprueba gastos operaciones en el exterior

Washington -- La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley que autoriza gastos en operaciones extranjeras de 15.200 millones de dólares durante el próximo año fiscal, 283 millones más que la cantidad aprobada para el año fiscal 2001. Artículo completo

Transcripciones, textos y artículos

(En orden cronológico desde el más reciente)

Funcionario de USAID habla de Plan Colombia

Analizan metas política Estados Unidos en los Andes

E.U. y Colombia firman acuerdo protección trabajadores derechos humanos

Política antinarcótica de E.U. en Colombia ayuda a derechos humanos

Declaración de la Cumbre en apoyo al proceso de paz en Colombia

Declaraciones presidentes Colombia y México en Cumbre Quebec

Presupuesto Bush incluye 731 millones dólares para iniciativa andina

Desarrollo social es aspecto esencial de Plan Colombia

Programas de USAID para desarrollo económico y social de Colombia

Destruirán 85 a 90 por ciento cultivos coca Colombia

Banco Mundial aprueba operación garantía apoyo Colombia

Declaración explicativa certificación antinarcóticos Colombia

Determinación presidencial sobre principales productores de drogas

Resumen ejecutivo prácticas derechos humanos Colombia 2000

Congresista E.U. Gilman urge cooperación europea control drogas

Congresista Gilman habla en Bolivia de control drogas

ATPA ofrece incentivos erradicar producción drogas ilícitas

Jefe CIA habla de narcotráfico y seguridad mundial

Informe Naciones Unidas sobre situación mundial drogas

Continúa cooperación antinarcótica entre E.U. y Colombia

Hoja informativa: Erradicación aérea de cultivos ilícitos

Estados Unidos aplaude progreso en eliminación de drogas ilícitas en Colombia

Nota: En los archivos puede encontrar más información sobre el apoyo de Estados Unidos a la paz, la democracia y el progreso económico de Las Américas.